

La universidad se moviliza contra las reformas

Francisco García

Secretario General FE CCOO

✉ pacogarcia@fe.ccoo.es

EL 24 DE MARZO, LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA se movilizó contra las políticas de recorte y los decretos promovidos desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Y contó con el respaldo de la sociedad, que salió a las calles a defender el modelo de universidad pública, democrática e interclasista. La alta participación en la huelga de profesorado, personal de administración y servicios y alumnado pone de relieve el rechazo generalizado que han suscitado unas medidas que tienen la vocación de cambiar el modelo universitario en nuestro país.

EL GOBIERNO NO QUIERE IRSE SIN DEJAR LOS DEBERES hechos, también en el ámbito de la educación superior. Los tiempos políticos, con los procesos electorales a la vuelta de la esquina, desaconsejan abrir el debate en torno a una nueva ley universitaria. Pero nos engañaríamos si consideráramos que la ausencia de ley va a cortapisar las ambiciones reformistas del Ministerio. Porque, a través de tres Reales Decretos, se va a proceder a realizar reformas estructurales que van a tener consecuencias de hondo calado sobre nuestro sistema de educación superior. Eso sí, se ahorran el diagnóstico previo, el debate social, el control del Parlamento, la evaluación del actual sistema..., lo que les permite tratar de legitimar sus políticas con medias verdades. Así tratan de apuntalar su reforma de la estructura de las enseñanzas, con la afirmación de que el 3+2 es el modelo hegemónico en Europa, lo que desmiente un análisis mínimamente riguroso de la realidad de los países de nuestro entorno. Los estudios del profesor Guy Haug ponen de manifiesto la diversidad de modelos europeos existentes. En una conferencia recientemente pronunciada en Madrid, señalaba que no hay una preeminencia clara de un modelo en la UE y se mostraba partidario de grados “robustos” de cuatro años.

Los decretos guardan una rigurosa coherencia entre sí, encajan como las piezas de un puzzle y constituyen una reforma universitaria en toda regla llevada a cabo por la puerta de atrás. Tenemos que reiterar que estas medidas tienen consecuencias sobre la financiación de nuestras universidades que, de generalizarse los grados de tres años, perderán 1.000 millones de euros, que se sumarán a los recortes de 1.500 de los últimos cuatro años, y que esta merma gravitará fundamentalmente sobre el capítulo de gastos de personal y sobre lo poco que queda del capítulo de inversiones, lo que nos coloca ante un doble escenario: por un lado, se abre la puerta a intensificar la eliminación de puestos de trabajo (a sumar a los más de 8.000 perdidos en los últimos dos años) y al deterioro de las condiciones laborales y de la negociación colectiva de los trabajadores de las universidades; por otro, el deterioro de las inversiones (capítulo que ya ha sido esquilmo por los recortes) incapacita a las universidades públicas no solo para crecer y adaptarse a las nuevas exigencias o para crear nue-

vas infraestructuras para la docencia o la investigación, sino también para remozar infraestructuras obsoletas (hay que tener en cuenta la antigüedad de algunos campus).

Pero los decretos tienen también un claro sesgo privatizador. Las universidades privadas se están “especializando” en la formación de postgrado. Mientras han ido experimentando un aumento lento aunque sostenido en la escolarización de alumnado de grado -epígrafe en el que alcanzan el 12% del total-, en los estudios de postgrado matriculan a más del 28% del total del alumnado. En este contexto, disminuir la duración de los grados y aumentar la de los postgrados, favorece objetivamente que las universidades privadas accedan a una parte progresivamente creciente del “pastel” de la educación superior. Para dejar las cosas más claras, uno de los decretos preparados por el Gobierno, desregula los requisitos exigidos hasta ahora para crear centros de educación superior, que pasarán a ser mucho menos exigentes. Florecerán las “universidades internacionales del garaje”.

Al profesorado se le dificultará su carrera profesional, poniendo trabas a su acreditación a través de una mayor discrecionalidad de las comisiones de acreditación.

Pero las consecuencias van más allá: se dibuja una universidad menos pública, menos democrática y más clasista. Los grados de tres años quedarán devaluados respecto a los actuales y solo podrán garantizar una formación muy generalista, que exigirá ser completada con un máster que no se cursa a precios públicos, lo que incrementará mucho el gasto de las familias. En un contexto de reducción de las becas y de endurecimiento de los requisitos para acceder a estas, se dibuja un modelo universitario con un creciente sesgo clasista.

Para redondear la faena, tanto el ministro Wert como su secretaria de Estado, cada vez que tienen ocasión, hablan de la oportunidad de sustituir las becas universitarias por un sistema de créditos. Así hipotecaríamos a nuestros jóvenes, generaríamos una burbuja de créditos universitarios como la que estalló en EEUU y garantizaríamos que solo fueran a la universidad los hijos de las clases más favorecidas. La ocurrencia podría mover a la risa si no viniera de donde viene y no supiéramos lo que están haciendo con la educación en este país. A mí me da miedo porque “donde ponen el ojo, ponen la bala”. Y porque el modelo de universidad que se dibuja con estas reformas ni garantiza la cohesión social, ni servirá de motor del desarrollo económico y social. Por eso seguimos peleando. Desde la movilización y desde la propuesta.

“Se dibuja una universidad menos pública, menos democrática y más clasista”